

Los incentivos a la participación, una oportunidad a explorar.

**Laia Márquez Muñoz**, Universitat de Girona.

**Jordi Pacheco i Canals**, Universitat de Barcelona

### **Resumen**

Aproximación al debate sobre los incentivos materiales en la teoría deliberativa y en la práctica participativa, con intención de analizar el estado de la cuestión y apuntar qué se deberían considerar en las investigaciones sobre la equidad en la participación ciudadana.

Palabras clave: deliberaciones públicas, participación ciudadana, compensación, incentivos económicos, igualdad procedimental, representación descriptiva.

### **Resum**

Aproximació al debat sobre els incentius materials en la teoria deliberativa i en la pràctica participativa, amb intenció d'analitzar l'estat de la qüestió i apuntar què s'hauria de considerar en les investigacions sobre l'equitat en la participació ciutadana.

Paraules clau: deliberacions públiques, participació ciutadana, compensació, incentius econòmics, igualtat procedimental, representació descriptiva.

### **Abstract**

Approach to the debate on material incentives in deliberative theory and participatory practice, with the intention of analysing the state of the issue and pointing out what research on equity in citizen participation should be taken into account.

Keywords: public deliberations, citizen participation, compensation, economic incentives, procedural equality, descriptive representation.

## **1. Introducción**

La política de Gobierno Abierto responde a la doble voluntad de las instituciones representativas de ofrecer participación y de satisfacer la demanda social de más participación.

Desde el punto de vista de la oferta, se ven obligadas a gestionar conflictos públicos con la legitimidad democrática principal, la que proviene de las elecciones por sufragio universal, debilitada a causa de la desconfianza ciudadana. Además, normativamente deben motivar el interés general que justifica sus decisiones a partir de los programas

electorales que suelen ser ambiguos y que consisten en paquetes cerrados de propuestas, lo que dificulta afirmar que cada una de ellas responda a la voluntad mayoritaria. Para producir legitimidad democrática suplementaria, las instituciones abren deliberaciones para tratar los conflictos públicos con inteligencia colectiva o cooperación dialógica entre diversas visiones ideológicas. Las deliberaciones permiten encontrar el punto de equilibrio entre las diferentes preferencias, aquella que maximiza el bienestar social y minimiza el perjuicio a todos los grupos sociales, después de haberlas analizado y transformado discursivamente. La persuasión mutua hace que las deliberaciones no se limiten a funcionar como un “mercado de ideas” donde vence la más racional, sino que se enriquecen y se transforman a través del aprendizaje mutuo en la búsqueda de un punto de equilibrio comunicativo que integre las diversas visiones.

La participación ciudadana permite afrontar problemas públicos complejos, como la crisis de la Covid-19, que además de sanitaria lo fue de educación, de juventud, de actividad productiva... (Brugué, 2022). Especialmente si los participantes trascienden el segmento de opinión pública habitualmente más asociado al campo de la política de quien toma la decisión, la participación construye respuestas más creativas que las burocráticas, limitadas por la segmentación organizativa y la obediencia jerárquica.

Además, las soluciones a los problemas públicos no suelen depender sólo de decisiones unilaterales de las administraciones, ya que hay una interdependencia entre problemas y actores (Blanco y Gomà, 2003). Así, el mandato del hito 13.2 de los ODS de incorporar medidas relativas al cambio climático depende de muchas actuaciones autónomas con impacto real, por ejemplo, en la emisión de gases, por parte de la sociedad civil, lo que hace conveniente incluirlos en la gobernanza a través de espacios de diálogo. Esta implicación en la gobernanza facilita la asunción de estos objetivos y su cumplimiento voluntario (Pacheco, 2022).

Desde el punto de vista de la demanda, los partidarios de la democracia participativa esperan que la alta movilización ciudadana asociada a los procesos participativos induzca estructuras autónomas (Blanco, 2002:21). En España, la presión de los “indignados” y los posteriores gobiernos de cambio, que asumieron implícitamente este presupuesto teórico, fue otro factor de incremento de la oferta participativa a partir de 2016.

## **2. La calidad de la participación ciudadana deliberativa e institucional**

La expresión *participación ciudadana* es polisémica. Para Cammaerts y Carpentier (2005) es compromiso del pueblo y sus organizaciones con el entorno público, pero esta definición es demasiado amplia ya que incluye el asociacionismo, el voluntariado

o la colaboración público-social (Pacheco, 2016). Aquí nos limitamos a procesos comunicativos que las instituciones abren ordenadamente a la ciudadanía o a la sociedad civil para deliberar sobre decisiones de políticas públicas<sup>1</sup>, lo que asume el elemento más disruptivo de nuestros sistemas políticos: valorar que personas supuestamente poco cualificadas deliberen sobre asuntos trascendentes (Ganuza y Menéndez, 2019:98-9).

Aunque Habermas (1981) esperaba que el fruto del diálogo en situación ideal de habla fuera el consenso, este no suele aparecer en la participación ciudadana, por lo que sus objetivos se limitan a la economía moral del desacuerdo. Sus resultados no son unitarios, ya que junto con los consensos se recogen los “acuerdos sobre los desacuerdos”, integrando constructivamente el máximo de propuestas razonables de los opositores a la decisión. Esto es posible porque la participación ciudadana no decide directamente y porque en democracia las decisiones siempre son revisables, haciendo que propuestas descartadas en un momento dado se puedan recuperar en el futuro. Estos desacuerdos racionalizados son una fortaleza más que una debilidad ya que los resultados de las deliberaciones, si recogen sistemáticamente los diferentes puntos de vista que se mantienen después ponderar todas las afectaciones y argumentos a favor y en contra, se pueden transferir al conjunto de la esfera pública y del sistema deliberativo institucional y enriquecerlos con elementos que se pueden utilizar en deliberaciones posteriores y como base para que los órganos electos intuyan con su ideología el punto de equilibrio que consideran que maximiza la función de bienestar social.

Encontrar estos “acuerdos sobre los desacuerdos” requiere intercambiar argumentos de forma abierta e inclusiva (Gutmann y Thompson, 1996) en un ambiente de empatía y respeto (Abdullah y McCormack 2008:7). Habermas (2002) es más exigente al considerar que sólo pueden dialogar quienes expresan y escuchan mutuamente sus diferencias con respeto y en una relación de igual a igual. Tapella (2021) distingue entre oportunidades y capacidad de participar. Las oportunidades surgen en las previsiones legales y reglamentarias o bien a iniciativa de electos o del funcionariado y se mide por el número de actuaciones participativas, mientras que la capacidad se refiere a la implicación efectiva de la ciudadanía y su influencia real, lo que se evalúa con técnicas cualitativas. Las leyes impulsan oportunidades para participar, como se observa con el elevado número de consultas previas en normativa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Confrontar esta definición con el art 1.2 del [Anteproyecto de ley de participación ciudadana de la Generalitat de Catalunya](#).

<sup>2</sup> Art 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Pero en nuestras administraciones burocratizadas las formalidades pesan más que el impacto social, por lo que muchas oportunidades pasan desapercibidas o bien se abren con la ya decisión tomada, haciendo que la capacidad de participar suela ser baja. De ahí se desprende que la política de Gobierno abierto debería priorizar la calidad deliberativa a multiplicar actuaciones participativas sin las condiciones adecuadas (Martí, 2008). Esto incluye dos tipos de exigencias, las relacionadas con la comunicación ética y racional y las relacionadas con la inclusividad. Esta ponencia se limita a esta última y, más específicamente, a conseguir participantes representativos que describan bien el conjunto de la población.

Incrementar la capacidad de participar requiere focalizar en los tres pasos normativos de Gutmann y Thompson (2004) para obtener deliberaciones de calidad: el para qué, el qué y el cómo.

1. *Para qué* es el impacto de la participación: más legitimidad, aprendizaje y búsqueda del interés público.
2. *Qué* es el intercambio argumentativo entre todos los colectivos afectados, lo que obliga a obtener grupos de composición equilibrada (Curato y Doerr, 2022).
3. *Cómo* son las fases de explicación, escucha activa y rendición de cuentas.

En las complejas sociedades contemporáneas, *el qué* no puede ser masivo. Fishkin (2011) advertía de la dificultad de obtener simultáneamente igualdad política, participación masiva y deliberaciones de calidad. Más allá del coste excesivo de la logística (Márquez, 2022), la libertad para seguir el propio estilo de vida y dedicarse a la vida privada, sin demasiados compromisos políticos, son derechos inalienables que hacen inviable la implicación sostenida en la vida pública al estilo de la democracia participativa de la antigua Atenas. Díez et al (2021) detectaron que los procesos participativos institucionales en Zaragoza encontraban tres dificultades: la poca cultura participativa, el mal uso de la participación por parte de las instituciones y el bajo número de participantes. Esto último se explica porque hay más oferta institucional de participación que demanda social efectiva, lo que dificulta conseguir participantes. Otro freno es la complejidad de las decisiones, que requieren conocimiento técnico, como advertía la visión schumpeteriana de la democracia representativa cuando justificaba la ausencia de participación.

Ya que no podemos escapar de la democracia representativa y aceptamos que los participantes efectivos sólo serán una fracción minoritaria de la población, al menos debemos procurar que sean representativos. Los grupos equilibrados, además de ser cuestión de justicia procedimental, contribuyen a la igualdad substantiva, ya que la ausencia o subrepresentación de ciertos grupos desvía el equilibrio comunicativo que

emerge en los fóruns del equilibrio comunicativo a que hubiera llegado hipotéticamente toda la población si hubiera participado. Estas desviaciones refuerzan las desigualdades sociales y deja la movilización social como única alternativa para la participación de los públicos subalternos.

Para reducir la distancia entre las preferencias de un proceso participativo y las preferencias de un hipotético diálogo universal, podemos recurrir a las cuatro condiciones ideales expuestas por Habermas (Tabla 1):

**Tabla 1. Condiciones ideales de diálogo (Habermas, 1996)**

Incluye todos los puntos de vista relevantes.

Todo el mundo tiene las mismas oportunidades para influir.

Los participantes pueden expresarse activamente (si quieren).

La comunicación está libre de coacciones y presiones grupales.

Conseguir deliberaciones inclusivas tiene su dificultad. Aunque las puertas estén formalmente abiertas a todos, la ciudadanía se autoselecciona según su capacidad para asumir los costes de participación (esfuerzo intelectual para informarse y formarse reflexivamente una opinión, desplazamiento...), que se distribuye desigualmente según sus recursos económicos, cognitivos y sociales. La participación es selectiva porque las personas más integradas en redes y organizaciones sociales, más recursos económicos y tiempo y mayores habilidades comunicativas están más presentes (Verba et al, 1995). Sin correctivos, los grupos deliberativos tienden a la homogeneidad, sin describir bien el conjunto de la población y produciendo resultados poco representativos (Ebdon y Franklin, 2006). Estas desigualdades estructurales crean una ciudadanía de primera, con voz en las decisiones, y otra de segunda, compuesta por los sectores situados en los márgenes de la esfera pública, haciendo que los foros favorezcan a los intereses y visiones hegemónicas en el espacio público, contradiciendo el principio normativo de la democracia deliberativa de la igualdad procedimental.

### **3. Las barreras a la participación**

Es fácil localizar barreras que hacen selectiva la participación. Así, los problemas económicos inducen a priorizar la obtención de ingresos y las desigualdades de género lastran la participación de las mujeres con mayores cargas familiares o del hogar (Parés et al, 2020). También sabemos que el compromiso cívico se correlaciona con la familia de nacimiento (Letki 2008, Bevelander y Pendakur, 2007)

y que las barreras territoriales están presentes en los procesos supramunicipales presenciales. Pascual (2021) identifica seis colectivos con especiales dificultades en Cataluña, aunque encontraríamos más:

- La diversidad funcional<sup>3</sup> genera barreras físicas, comunicativas y cognitivas.
- La fuerte identificación entre instituciones públicas y la cultura y lengua normativa nacional frena a las personas de origen extranjero<sup>4</sup>. Hay que sumar el miedo a contactar con las instituciones públicas de los colectivos en situación irregular.
- Las personas en instituciones penitenciarias no tienen libertad para acceder a las sesiones ni presencial, ni telemáticamente.
- Las personas sin hogar, la muestra más extrema de exclusión, están totalmente alejados de la vida relacional principal de la esfera pública.
- La infancia y la juventud, lo que contradice el mandato de considerarlos sujetos de derecho, no solo objetos de protección (Lázaro, 2014)<sup>5</sup>.
- Las barreras digitales, en un entorno donde plataformas como el Decidim cada vez tienen más protagonismo, perjudican especialmente a las personas mayores, que ya cuentan con factores específicos que frenan su participación, como la soledad no deseada o la concentración de enfermedades.

#### **4. Mecanismos de superación de las barreras**

La interseccionalidad y la superdiversidad conducen a tal número de situaciones de inferioridad estructural que hacen inviable elaborar un protocolo omnicompreensivo para conseguir una representación perfectamente descriptiva.

El camino es que las unidades administrativas de participación actúen con una mentalidad de capacitación e impacto social de la participación, sustituyendo la mentalidad burocrática centrada en las oportunidades de participar que predomina en nuestras instituciones (González, 2004; Torrens, 2020). Esta mentalidad permitiría repensar el diseño de las actuaciones participativas, preguntándose creativamente como superar o, al menos, como mitigar las barreras a la participación teniendo en cuenta el contexto y los públicos más concernidos por cada decisión.

---

<sup>3</sup> ONU (2006) [Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad](#). El artículo 29 recoge el derecho a la participación en la vida pública y política de los individuos con capacidades diversas.

<sup>4</sup> Pacheco (2016) analiza las dificultades de las personas de origen extranjero en la participación.

<sup>5</sup> Convención sobre los derechos de la infancia de Naciones Unidas (1989).

Se pueden aplicar muchas medidas para mitigar los diferenciales en la propensión a asistir, como convocar las deliberaciones in situ, donde la gente desarrolla su vida cotidiana, en vez de trasladarla a oficinas gubernamentales, o dar apoyo a las responsabilidades familiares, como en la Asamblea Ciudadana del Clima de Catalunya, que ofrecía un servicio de cuidado a menores de 0 a 6 años. En esta línea, Álvarez (2022) defiende que la participación ciudadana debería apoyar los cuidados a personas dependientes (infancia, ancianidad, pacientes...), para superar las barreras a la participación que sufren los sectores sociales que dedican horas a su bienestar. No hay que profundizar demasiado para conectar esta barrera con la perspectiva de género<sup>6</sup>.

**Tabla 2. Algunas soluciones a barreras a la participación en los colectivos estudiados por Pascual (2021)**

| Grupo                        | Mecanismo   |
|------------------------------|---|
| Diversidad funcional         | Locales accesibles<br>Lectura fácil<br>Lenguaje de signos<br>Documentación en braille<br>Enchufes para ventilación mecánica |
| Origen extranjero            | Contar con las entidades sociales para la provisión de participantes<br>Interpretación simultánea, si fuera necesario       |
| Instituciones penitenciarias | Sesiones presenciales en su interior  |
| Sin hogar                    | Contar con el apoyo de los servicios sociales y las entidades que están en contacto con estas personas                      |

<sup>6</sup> Estadísticamente, las mujeres desempeñan mayor trabajo no remunerado que los hombres. Las mujeres, post pandemia de la covid-19, dedican de media 16 horas más a la semana a cuidados o a tareas del hogar que los hombres (Farré y González, 2021).

|                     |   |
|---------------------|---|
| Juventud e infancia | Deliberaciones en el entorno escolar y en la educación en el ocio                       |
| Mayores             | Tamaño de la letra<br>Deliberaciones híbridas con el apoyo del voluntariado a domicilio |

Donde se han depositado más esperanzas para neutralizar la autoselección y obtener una representación descriptiva es en el sorteo (Van Reybrouck, 2017), que es el método de selección de participantes que se aplica en las Asambleas Ciudadanas. Si se sigue el trilema de Fishkin (2011), se obtiene un grupo manejable para desarrollar deliberaciones de calidad mientras que se garantiza la igualdad política dando la misma probabilidad matemática a todo el mundo de estar presente e influir en las decisiones. Se sacrifica la participación masiva, lo que no es una pérdida significativa porque, al fin y al cabo, la mayoría de procesos participativos no suelen ser masivos.

A diferencia de los jurados judiciales, cuya participación es obligatoria salvo casos justificados, en estas asambleas la participación es voluntaria, lo que complica esquivar la autoselección. En la Asamblea Ciudadana del Clima de Cataluña hubo un esfuerzo por conseguir un grupo de 100 personas representativo del conjunto de la sociedad a través de dos sorteos estratificados respecto a género, edad, nivel de estudio, territorio y origen<sup>7</sup> <sup>8</sup>. El primer sorteo obtuvo una muestra razonablemente descriptiva, a pesar de excluir los residentes sin derechos de ciudadanía, menores de 16 años y cargos electos. A continuación, las personas escogidas tuvieron la opción de inscribirse voluntariamente rellenando un formulario en la plataforma Participa.gencat.cat (el Decidim de la Generalitat de Catalunya). Aunque en el

---

<sup>7</sup> No queda claro cómo se gestionaron los datos sensibles que, a priori, no están en el censo. Queda pendiente el análisis detallado de esta metodología de selección. Fuente:

<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/546784/marxa-proces-escollir-persones-que-constituiran-lassemblea-ciutadana-pel-clima-catalunya>

<sup>8</sup> Otra experiencia similar fue el Foro joven de Barcelona, celebrada entre el 15 de mayo del 2021 y el 1 de mayo del 2023. Fue una asamblea ciudadana formada por 99 jóvenes entre 16 a 29 años escogidos por sorteo para reflexionar sobre las políticas municipales juveniles y obtener propuestas para el Plan de Juventud de Barcelona 2022-2030. Como detalla Decidim-Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona realizó un doble sorteo para obtener participantes representativos. Se realizó una selección previa con criterios de edad, sexo, origen, barrio y se enviaron 20.000 invitaciones a las personas seleccionadas. De estas, se respondieron 1.600 y se realizó un segundo sorteo con los mismos criterios que acabó escogiendo el grupo de 99 participantes.



segundo y definitivo sorteo se hizo con los mismos criterios de estratificación, en este paso apareció inexorablemente la autoselección.

En primer lugar, encontramos la brecha digital asociada a rellenar un formulario burocrático a través de una plataforma de participación. En segundo lugar, podemos suponer que las personas más comprometidas e intensamente concernidas por el cambio climático tendieron más a inscribirse, lo que generaría sesgos porque la distribución de este concernimiento también está condicionada por factores estructurales. Finalmente, dada la superdiversidad de nuestras sociedades, la metodología de estratificación necesitaría centenares de clasificaciones, cruzando géneros, edades, niveles de estudios, territorios, orígenes culturales... Se tendría que asegurar un mínimo de una persona en cada clasificación y, cuando hay más de una, aplicar el sorteo dentro de cada clasificación. Si alguna clasificación estuviera vacía, quizá habría que recorrer a la búsqueda activa de participantes para complementar el sorteo.

Una vez definido el grupo deliberante, la preocupación por mantener la representación descriptiva se tradujo en compensaciones económicas que neutralizaran conflictos de lealtades entre obligaciones de los participantes. Al fin y al cabo, si existen costes de participación, solo se podrán mitigar sus efectos con incentivos materiales que los compensen.

## **5. Los incentivos económicos**

Aunque parte de la compensación por participar sea psicológica, de ver que la propia visión contribuye a las políticas públicas (Elster, 1997), otra parte debe ser material porque la inhibición se reparte desigualmente según la posición en la estructura social.

Los incentivos vienen de lejos. En la democracia participativa de la Antigua Atenas, la *misthós* o compensación permitía que los ciudadanos más pobres compatibilizan la participación con el trabajo productivo. Era una cantidad inferior a la renta necesaria para liberar del trabajo, pero permitía abandonar las actividades económicas de menor valor añadido y dedicar tiempo a la vida comunitaria. Era un incentivo, no un modo de vida (Benítez 2005).

En la democracia representativa, encontramos incentivos en las mesas electorales que, aun haciendo la selección por sorteo y de asistencia obligatoria, incluyen una compensación económica (70€ en España en 2024). Las alternativas serían organizarlas con voluntariado, con riesgo de no cubrir todas las mesas electorales; como prestación obligatoria sin compensación, con riesgo de incrementar la resistencia de la población en caso de no poder afrontar sus obligaciones o a través

de los partidos, con riesgo de corrupción electoral masiva (Márquez, 2024; Moreno, 2019).

En el ámbito deliberativo, los jurados populares en el ámbito judicial siguen el mismo esquema de selección por sorteo y prestación obligatoria con compensaciones, aunque son más intensas ya que a la retribución económica directa añaden el servicio de comidas, el alojamiento y el coste del transporte<sup>9</sup>.

Con esta larga tradición, parecería lógico contemplar incentivos económicos en la participación ciudadana. Sin embargo, son objeto de controversia. El principal argumento contrario es normativo, al considerar que la participación debería consistir en contribuciones libres y voluntarias al bien común, que trascienden el beneficio particular (Pachi 2009:76), sin crédito, ni salario. Pero, ya hemos visto que este planteamiento conduce a la desigualdad procedimental y a la inequidad sustancial, violentando los principios de la democracia deliberativa.

Desde el punto de vista funcional, se teme que la ciudadanía asista a las deliberaciones sólo por los incentivos, haciendo que esté presente físicamente pero mentalmente desconectada. Sin embargo, esta argumentación es contrafáctica, ya que haría inviable los *focus-group* de los departamentos de marketing de las empresas privadas, que retribuyen a sus participantes y les hacen hablar ya no de temáticas de bien común, sino de productos y servicios estrictamente privados.

La tercera razón es el elevado coste para la administración organizadora, ya que supone dedicar recursos de unos presupuestos siempre limitados. Aunque asumimos por experiencia que la participación ciudadana tiene un elevado retorno de la inversión, ya que da fluidez a la toma de decisiones y, desde el punto de vista sustantivo, genera mayor valor público, habría que hacer una evaluación coste-beneficio. A pesar de ello, en políticas como la sanidad o la educación, por cara que sea la participación, sólo representará una fracción insignificante del gasto en estos programas<sup>10</sup>.

En sentido contrario, el principal argumento a favor de la compensación es que mitiga los costes de la participación, disminuyendo los efectos de barreras como la pérdida de salario o ventas en el tiempo de trabajo productivo o las obligaciones personales en el tiempo de trabajo reproductivo. Y es de interés general en obtener grupos equilibrados, porque la inclusión participativa genera mejoras epistémicas y de justicia

---

<sup>9</sup> En Cataluña en 2024 eran 77€ por día de sesión más 35€ por asistir al proceso de selección.

<sup>10</sup> El presupuesto consolidado de la Generalitat de Catalunya en salud para 2022 era de 11.244,2 M€, lo que hace insignificante el coste de introducir incentivos en la participación, especialmente si esperamos un incremento del valor público del gasto de este presupuesto.

social. Además, desde el punto de vista del equilibrio comunicativo, la diversidad en el interior de los grupos deliberantes dificulta su polarización, siendo un contrapeso al actual contexto comunicativo.

Una vez aceptada su necesidad, hay que decidir si los incentivos económicos deben ser individuales o comunitarios (Ziamou, 2000). Hay casos de incentivos por asistir a los consejos estables de participación a las asociaciones con vocalías, así como subvenciones genéricas a sindicatos, asociaciones vecinales o ecologistas para reforzar la voz débil en la formulación de las políticas públicas. Pero el contexto individualista actual (Camps, 1993) favorece los incentivos directos a las personas. Además, los procesos participativos suelen estar abiertos al conjunto de la ciudadanía, con lo que la intermediación de las entidades sociales suele limitarse a difundirlos o bien a reclutar de forma autónoma algunos participantes.

Compensar con dinero genera el reto de calcular la cantidad a pagar, que no puede ser homogénea por qué no se dan las mismas condiciones en municipios con pocos habitantes y gran desarrollo comunitario que en grandes ciudades donde predomina el aislamiento social (Langness et al, 2023). Desde una aproximación utilitarista, podríamos asimilar la asistencia como equivalente a trabajo, ya que determinados perfiles solo participarían si dejan de lado el trabajo retribuido o bien el trabajo reproductivo, cuyos costes de oportunidad se podrían cuantificar dinerariamente.

Calcular los costes de oportunidad tiene dificultades, como el problema de la dispersión estadística salarial. Ahora bien, el primer criterio a tener en cuenta es que no se trata de compensar todos los costes de oportunidad, sino de superar las barreras de los colectivos menos propensos a participar, siendo razonable utilizar algún criterio objetivo, como un porcentaje de la mediana de los salarios por hora de asistencia. En todo caso, la cantidad tiene que ser moderada ya que el objetivo se limita a dar la oportunidad a todos y todas a participar para obtener grupos socialmente equilibrados y evitar el efecto inverso: la aparición de participantes profesionales (Arbter y Handler, 2007).

También hay que contemplar los costes indirectos del traslado y la manutención. Si la ciudadanía tiene que desplazarse a otra localidad, la institución organizadora podría asumir estos costes pagando el kilometraje o el transporte público. Si el número de participantes es limitado, se pueden organizar el transporte en taxis o minibuses o, si es más numeroso, mediante coches compartidos.

La Asamblea Ciudadana del Clima de la Generalidad de Cataluña<sup>11</sup> es un caso práctico de combinación de remuneración directa (65€ por sesión) con la asunción de los gastos indirectos de transporte, catering, alojamiento y servicios de cuidados. No podemos valorar su impacto porque todavía no se han publicado los datos de participación efectiva en la Asamblea, ni, todavía menos, los datos por estrato social de los que se utilizaron en los sorteos.

Finalmente, se podrían estudiar otros mecanismos, como el carnet de participante, con descuentos en los servicios públicos, impuestos y tasas. Además, dentro de los incentivos materiales no estrictamente económicos, se podría prever permisos dentro de la jornada laboral. De la misma manera que la participación en las mesas electorales implica un permiso no recuperable de cinco horas el día posterior, pero con la compensación correspondiente a las empresas afectadas.

## **6. Conclusiones**

Las instituciones representativas tienen dificultades para responder a problemas complejos. En este contexto, la participación ciudadana deliberativa permite abordar esta complejidad con inteligencia colectiva. La política de Gobierno abierto promueve el uso de la participación ciudadana, pero ante la disyuntiva de dar más oportunidades de participación o bien incrementar la capacitación de la participación, habría que priorizar la segunda.

Esto conlleva la necesidad de asegurar la presencia de todos los grupos sociales afectados por las decisiones públicas en la composición de los grupos deliberantes, lo que obliga a superar o, como mínimo, mitigar las barreras a la participación. El objetivo de obtener grupos descriptivos del conjunto de la sociedad exige repensar cada actuación participativa para adaptarla a la idiosincrasia de los sectores sociales especialmente concernidos por la decisión pública. Esta ponencia describe algunas de las actuaciones que se pueden adoptar, entre las que destacan tres: el apoyo a las responsabilidades de cuidados de las personas participantes, el sorteo y los incentivos de carácter económico.

Aunque sean controvertidos, son imprescindibles para conseguir la igualdad procedimental asociada a los principios normativos de la democracia deliberativa. Hay que concebirlas como una inversión, cuyo retorno consiste en mejores decisiones gracias al incremento de la inteligencia colectiva en el grupo deliberante gracias al aumento del número de participantes y de su diversidad. Este es el interés general

---

<sup>11</sup> Realizada entre el 18 de noviembre del 2023 y el 10 de febrero del 2024. Fuente: plataforma Participa.gencat: <https://participa.gencat.cat/processes/assembleaclima?locale=es>

que justifica que las administraciones públicas los apliquen en sus experiencias participativas.

Esta ponencia se limita a explorar el problema de los incentivos como referencia para futuras investigaciones, con intención de detectar aquellas cuestiones que requieren mayor atención, entre las que destacan: ¿qué estrategia de incentivos es más eficaz?, ¿qué cantidad se debería destinar a cada participante?, ¿debería ser la misma para cada participante cuando cada uno se sitúa en un punto de partida diferente?, ¿es válido para todos los procesos participativos?, ¿cuál es el retorno de la inversión? o ¿cuál es la mejora en la calidad de las experiencias participativas gracias a los incentivos?

Finalmente, hay que tener presente que la representación descriptiva en los grupos deliberantes es condición imprescindible pero insuficiente para una participación ciudadana inclusiva, puesto que también se debería tener en cuenta la representación substantiva o igualdad de libertad expresiva dentro de los foros deliberativos, incluyendo aspectos como las barreras culturales a la participación, el sentido de la participación como parte de la satisfacción psicológica o los diversos grados de uso de la palabra y de prestigio ante los otros participantes.

## 7. Referencias

Abdullah, C M i McCormack. 2008. Facing Racism in a Diverse Nation. A Guide for Public Dialogue and Problem Solving. Everyday Democracy.

Álvarez, E. M (2022) La asamblea ciudadana para el clima. ¿Un modelo a seguir en las asambleas ciudadanas regionales y locales? *Revista Actualidad Jurídica Ambiental*, 122, 41-81 <https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-18-Alvarez-Asambleas-climaticas.pdf>

Arbter K, Handler M, Purker E, Tappeiner G y Trattnigg R (2007) *The Public Participation Manual. Shaping the future together*. Austrian Society for Environment and Technology.

Benítez, B (2005). *La ciudadanía de la democracia ateniense*. Foro Interno. Vol. 5. Universidad Complutense de Madrid. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2147332>

Bevelander, P y Pendakur R (2007) *Minorities, Social Capital and Voting*. Institute for the Study of Labor. Discussion Paper Series. 2928.

Blanco, I (2002, 8 al 11 de octubre). *Presupuestos participativos y democracia local : una comparación entre las experiencias brasileñas y españolas*. [Congreso] VII

Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal <https://base.socioeco.org/docs/clad0043506.pdf>

Blanco, I i Gomà, R. (2003). Gobiernos Locales y Redes Participativas: retos e innovaciones. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (26), 73-100. <https://1library.co/document/9yn756pz-gobiernos-locales-participativas-innovaciones-ismael-blanco-ricard-goma.html>

Brugué, Q (2022) *Organizaciones que saben, organizaciones que aprenden*. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Cammaerts, B, i Carpentier, N (2004, 20 al 24 de maig). *The Unbearable Lightness of Full Participation in a Global Context: WSIS and Civil Society participation, Transnational Communities and ICTs: Participation and Citizenship*. [Conferencia] Universitat de Lapland, Rovaniemi, Finlandia <https://researchportal.vub.be/en/publications/the-unbearable-lightness-of-full-participation-in-a-global-contex-2>

Camps, V, (1993), Paradojas del individualismo, Crítica

Curato N y Doreen (2022). Rhetorical Criticism. Ercan, S, Asenbaum, H, Curato N, Mendonça R (Ed) *Research Methods in Deliberative Democracy*. (266-277), Oxford. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/60764>

Decidim.Barcelona (s.d) *Foro Joven Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona* <https://www.decidim.barcelona/processes/forumjoveBCN?locale=es>

Díez, S, Heras, E, Lidón I, Manchado E, Romero, C, (2021, 6 al 9 de julio) *Identificación de barreras de los procesos participativos en la ciudad de Zaragoza mediante la aplicación metodológica del diseño de Servicios* [Congreso]. 25 Congreso Internacional de Gestión de Proyectos y Ingeniería [http://dspace.aepro.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/2947/AT03-037\\_21.pdf?sequence=5&isAllowed=y](http://dspace.aepro.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/2947/AT03-037_21.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

Ebdon, C., y Franklin, A. L. (2006). Citizen participation in budgeting theory. *Public Administration Review*, 66(3), 437–447. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00600.x>

Elster, J (1997). *The Market and the Forum: three varieties of political theory*, a Bohman, J i Regh (eds). *Deliberative Democracy*. MIT Press.

Farré, L y González L (2021) .Trabajo remunerado y no remunerado: la pandemia acentúa el fenómeno de la doble jornada entre las mujeres. *Fundación la Caixa. El Observatorio Social*. <https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/trabajo->

[remunerado-y-no-remunerado-la-pandemia-acentua-el-fenomeno-de-la-doble-jornada-entre-las-mujeres](#)

Fishkin, J. (2011). Deliberative democracy and constitutions. *Social philosophy and policy* (vol. 28, núm. 1, pàg. 242-260).

Ganuzas, E y Menéndez, M (2019). ¿Te ha tocado? El sorteo llega a la política de Madrid. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, 25(1), pp. 95-109. <http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2020.25.1.6>

González, A. (2004). *La participació telemàtica a les institucions públiques. Aplicació pràctica al Consell Insular de Menorca*. TFM - UOC.

Gutmann, A. i Thompson, D. (1996). *Democracy and Disagreement*. Boston: Harvard University Press.

Gutmann, A. i Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?* Princeton: Princeton

Habermas (1981). *Teoría de la Acción Comunicativa*.

Habermas, J (2002) *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Paidós básico.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, Mass: MIT Press. on University Press

Langness, M., Morgan, W., Cedano, S., y Falkenburger, E. (2023). *Equitable Compensation for Community Engagement Guidebook*. *Urban Institute* <https://www.urban.org/sites/default/files/2023-08/Equitable%20Compensation%20for%20Community%20Engagement%20Guidebook.pdf>

Lázaro, A (2014). La participació política de la infància a Catalunya: el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents. *Inf@ncia* (77). [https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions de bsf/04 familia infancia adolescencia/butlleti infancia articles 2014/links/profunditat-77.pdf](https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions%20de%20bsf/04%20familia%20infancia%20adolescencia/butlleti%20infancia%20articles%202014/links/profunditat-77.pdf)

Letki, N (2008) Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighborhoods. *Political Studies* 56 (1), 99-126 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9248.2007.00692.x>

Márquez, L (2022) *L'impacte de les plataformes digitals en els processos participatius* [Trabajo de Final de Grado]. Universidad de Girona. <https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/21728>

- Márquez, L. (2024). Incentius en la participació ciutadana. *Social.cat*. <https://www.social.cat/opinio/20328/incentius-participacio-ciutadana>
- Martí, J. L. (2008). Algunes precisions sobre les noves tecnologies i la democràcia deliberativa i participativa. *IDP. Revista de internet, dret i política*, (6), 3-12. <https://www.redalyc.org/pdf/788/78817209004.pdf>
- Moreno J L (2019). *Retorno a Atenas*. La democràcia com a principi antioligàrquic Madrid: Siglo XXI
- ONU (2006) Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- Pacheco, J. (2016). *Els efectes democràtics de les deliberacions institucionals en la inclusió multicultural*. [Tesis]. Universitat de Barcelona. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/106713>
- Pacheco, J. (2022). *La gestió pública intel·ligent a través del Govern obert digital*. Ponència XVI Congrés AECPA. <https://aecpa.es/es-es/la-gestion-publica-inteligente-a-traves-del-gobierno-abierto-digital-/congress-papers/3987/>
- Pachi, L (2009) La efectiva implementació de la participació ciutadana. *La Tendència Revista de anàlisi política* (9) <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4635/1/RFLACSO-LT09-14-Panchi.pdf>
- Parés L., Sola, M., Pacheco, J., Rodà, B i Peña, I. (2020). *Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius*. [https://governobert.gencat.cat/web/.content/30\\_ParticipacioCiutadana/04\\_Difusio\\_i\\_recerca/guies\\_breus\\_de\\_participacio\\_ciutadana/Guia-transversalitat-genero/Guia\\_Transversalitat\\_de\\_Genero\\_ACC.pdf](https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana/04_Difusio_i_recerca/guies_breus_de_participacio_ciutadana/Guia-transversalitat-genero/Guia_Transversalitat_de_Genero_ACC.pdf)
- Participa.Gencat.Cat (s.f) *Assemblea Ciutadana per el Clima*. Generalitat de Catalunya. <https://participa.gencat.cat/processes/assembleaclima?locale=es>
- Pascual, J (2021) Les barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió." *Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya*. [https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2021-06/2021-06-29\\_t3s\\_dossier\\_catalunya\\_social\\_participacio\\_politica.pdf](https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2021-06/2021-06-29_t3s_dossier_catalunya_social_participacio_politica.pdf)
- Tapella, E. (2021). Una evaluació sense evaluadors. Participació ciutadana en la Agenda 2030. *Revista Brasileira de Avaliação*, 10(2), 1-8 <https://app.periodikos.com.br/article/10.4322/rbaval202110013/pdf/rbaval-10-2-e101321.pdf>



Torrens, Xavier (2021). *La Nueva Gestión Pública como metodología de la Ciencia Política en el diseño de políticas públicas*. A: Sánchez de la Barquera, H. (2020) *Antologías para el estudio y la enseñanza de la Ciencia Política. Volumen III*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Van Reybrouck, D (2017) *Contra las elecciones* Madrid: Taurus

Verba, S Schlozman K y Brady H E (1995) *Voice and Equality, Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

Ziamou, T. (2000) *Public Participation in Administrative Rulemaking: The Legal Tradition and Perspective in the American and European (English, German, Greek) Legal Systems*. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Els incentius a la participació, una oportunitat per explorar.

**Laia Márquez Muñoz**, Universitat de Girona.

**Jordi Pacheco i Canals**, Universitat de Barcelona

## 1. Introducció

La política de govern obert respon a la doble voluntat de les institucions representatives d'oferir participació i de satisfer la demanda social de més participació.

Des del punt de vista de l'oferta, es veuen obligades a gestionar conflictes públics amb la principal legitimitat democràtica, la que prové de les eleccions per sufragi universal, afeblida a causa de la desconfiança ciutadana. A més, normativament han de motivar l'interès general que justifica les seves decisions a partir dels programes electorals que solen ser ambigus i que consisteixen en paquets tancats de propostes, cosa que dificulta afirmar que cadascuna respongui a la voluntat majoritària. Per produir legitimitat democràtica suplementària, les institucions obren deliberacions per tractar els conflictes públics amb intel·ligència col·lectiva o cooperació dialògica entre diverses visions ideològiques. Les deliberacions permeten trobar el punt d'equilibri entre les diferents preferències, aquella que maximitza el benestar social i minimitza el perjudici a tots els grups socials, després d'haver-les analitzat i transformat discursivament. La persuasió mútua fa que les deliberacions no es limitin a funcionar com un "mercat d'idees" on venç la més racional, sinó que s'enriqueixen i es transformen a través de l'aprenentatge mutu a la recerca d'un punt d'equilibri comunicatiu que integri les diverses visions.

La participació ciutadana permet fer front a problemes públics complexos, com la crisi de la Covid-19, que a més de sanitària ho va ser d'educació, de joventut, d'activitat productiva... (Brugué, 2022). Especialment si els participants transcendeixen el segment d'opinió pública habitualment més associat al camp de la política de qui pren la decisió, la participació construeix respostes més creatives que les burocràtiques, limitades per la segmentació organitzativa i l'obediència jeràrquica.

A més, les solucions als problemes públics no solen dependre només de decisions unilaterals de les administracions, ja que hi ha una interdependència entre problemes i actors (Blanco i Gomà, 2003). Així, el mandat de la fita 13.2 dels ODS d'incorporar mesures relatives al canvi climàtic depèn de moltes actuacions autònomes amb impacte real, per exemple, en l'emissió de gasos, per part de la societat civil, cosa que fa convenient incloure'ls a la governança mitjançant espais de diàleg. Aquesta implicació en la governança facilita l'assumpció d'aquests objectius i el seu compliment voluntari (Pacheco, 2022).

Des del punt de vista de la demanda, els partidaris de la democràcia participativa esperen que l'alta mobilització ciutadana associada als processos participatius indueixi estructures autònomes (Blanco, 2002:21). A Espanya, la pressió dels “indignats” i els governs de canvi posteriors, que van assumir implícitament aquest pressupost teòric, va ser un altre factor d'increment l'oferta participativa a partir del 2016.

## **2. La qualitat de la participació ciutadana deliberativa i institucional**

L'expressió participació ciutadana és polisèmica. Per a Cammaerts i Carpentier (2005) és compromís del poble i les seves organitzacions amb l'entorn públic, però aquesta definició és massa àmplia ja que inclou l'associacionisme, el voluntariat o la col·laboració publico social (Pacheco, 2016). Aquí ens limitem a processos comunicatius que les institucions obren ordenadament a la ciutadania o a la societat civil per deliberar sobre decisions de polítiques públiques<sup>1</sup>, cosa que assumeix l'element més disruptiu dels nostres sistemes polítics: valorar que persones suposadament poc qualificades deliberin sobre assumptes transcendentals (Ganuza i Menéndez, 2019:98-9).

Tot i que Habermas (1981) esperava que el fruit del diàleg en situació ideal de parla fos el consens, aquest no sol aparèixer a la participació ciutadana, per la qual cosa els seus objectius es limiten a l'economia moral del desacord. Els seus resultats no són unitaris, ja que juntament amb els consensos es recullen els “acords sobre els desacords”, integrant constructivament el màxim de propostes raonables dels opositors a la decisió. Això és possible perquè la participació ciutadana no decideix directament i perquè en democràcia les decisions sempre són revisables, fent que propostes descartades en un moment determinat es puguin recuperar en el futur. Aquests desacords racionalitzats són una fortalesa més que una debilitat ja que els resultats de les deliberacions, si arregen sistemàticament els diferents punts de vista que es mantenen després ponderar totes les afectacions i arguments a favor i en contra, es poden transferir al conjunt de l'esfera pública i del sistema deliberatiu institucional i enriquir-los amb elements que es poden utilitzar en deliberacions posteriors i com a base perquè els òrgans electes intueixin amb la seva ideologia el punt d'equilibri que consideren que maximitza la funció de benestar social.

Trobar aquests “acords sobre els desacords” requereix intercanviar arguments obertament i inclusivament (Gutmann i Thompson, 1996) en un ambient d'empatia i respecte (Abdullah i McCormack 2008:7). Habermas (2002) és més exigent en

---

<sup>1</sup> Confronteu aquesta definició amb l'art 1.2 de [l'avantprojecte de llei de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya](#).

considerar que només poden dialogar els qui expressen i escolten mútuament les diferències amb respecte i en una relació d'igual a igual. Tapella (2021) distingeix entre oportunitats i capacitat de participar-hi. Les oportunitats sorgeixen en les previsions legals i reglamentàries o bé a iniciativa d'electes o del funcionariat i es mesura pel nombre d'actuacions participatives, mentre que la capacitat fa referència a la implicació efectiva de la ciutadania i la seva influència real, cosa que s'avalua amb tècniques qualitatives. Les lleis impulsen oportunitats per participar-hi, com s'observa amb l'elevat nombre de consultes prèvies a la normativa<sup>2</sup>.

Però a les nostres administracions burocratitzades les formalitats pesen més que l'impacte social, per la qual cosa moltes oportunitats passen desapercibudes o bé s'obren amb la decisió presa, fent que la capacitat de participar sola ser baixa. Per això es desprèn que la política de Govern obert hauria de prioritzar la qualitat deliberativa a multiplicar actuacions participatives sense les condicions adequades (Martí, 2008). Això inclou dos tipus d'exigències, les relacionades amb la comunicació ètica i racional i les relacionades amb la inclusivitat. Aquesta ponència es limita a aquesta darrera i, més específicament, a aconseguir participants representatius que descriguin bé el conjunt de la població.

Incrementar la capacitat de participar requereix focalitzar en els tres passos normatius de Gutmann i Thompson (2004) per obtenir deliberacions de qualitat: el *perquè*, el *què* i el *com*.

1. *Per què* és l'impacte social de la participació: més legitimitat, aprenentatge i cerca de l'interès públic.
2. *Què* és l'intercanvi argumentatiu entre tots els col·lectius afectats, cosa que obliga a obtenir grups de composició equilibrada (Curato i Doerr, 2022).
3. *Com* són les fases d'explicació, escolta activa i rendició de comptes.

A les complexes societats contemporànies, el *què* no pot ser massiu. Fishkin (2011) advertia de la dificultat d'obtenir simultàniament igualtat política, participació massiva i deliberacions de qualitat. Més enllà del cost excessiu de la logística (Márquez, 2022), la llibertat per seguir el propi estil de vida i dedicar-se a la vida privada, sense gaires compromisos polítics, són drets inalienables que fan inviable la implicació sostinguda a la vida pública a l'estil de la democràcia participativa de l'antiga Atenes. Díez et al (2021) van detectar que els processos participatius institucionals a Saragossa trobaven tres dificultats: la poca cultura participativa, el mal ús de la participació per part de les institucions i el baix nombre de participants. Això darrer s'explica perquè hi

---

<sup>2</sup> Art 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ha més oferta institucional de participació que demanda social efectiva, cosa que dificulta aconseguir participants. Un altre fre és la complexitat de les decisions que requereixen coneixement tècnic, com advertia la visió schumpeteriana de la democràcia representativa quan justificava l'absència de participació.

Ja que no podem escapar de la democràcia representativa i acceptem que els participants efectius només seran una fracció minoritària de la població, almenys cal procurar que siguin representatius. Els grups equilibrats, a més de ser qüestió de justícia procedimental, contribueixen a la igualtat substantiva, ja que l'absència o subrepresentació de certs grups desvia l'equilibri comunicatiu que emergeix als fòrums de l'equilibri comunicatiu a què hi hagués arribat hipotèticament tota la població si hi hagués participat. Aquestes desviacions reforcen les desigualtats socials i deixa la mobilització social com a única alternativa per a la participació dels públics subalterns.

Per reduir la distància entre les preferències d'un procés participatiu i les preferències d'un diàleg universal hipotètic, podem recórrer a les quatre condicions ideals exposades per Habermas (1996):

Taula 1. Condicions ideals de diàleg (Habermas, 1996)

1. Inclou tots els punts de vista rellevants.
2. Tothom té les mateixes oportunitats per influir-hi.
3. Els participants es poden expressar activament (si volen).
4. La comunicació és lliure de coaccions i pressions grupals.

Aconseguir deliberacions inclusives té la seva dificultat. Tot i que les portes estiguin formalment obertes a tothom, la ciutadania s'autoselecciona segons la seva capacitat d'assumir els costos de participació (esforç intel·lectual per informar-se i formar-se reflexivament una opinió, desplaçament...), que es distribueix desigualment segons els recursos econòmics, cognitius i socials. La participació és selectiva perquè les persones més integrades en xarxes i organitzacions socials, més recursos econòmics i temps i més habilitats comunicatives són més presents (Verba et al, 1995). Sense correctius, els grups deliberatius tendeixen a l'homogeneïtat, sense descriure bé el conjunt de la població i produir resultats poc representatius (Ebdon i Franklin, 2006). Aquestes desigualtats estructurals creen una ciutadania de primera, amb veu en les decisions, i una altra de segona, composta pels sectors situats als marges de l'esfera pública, fent que els fòrums afavoreixin els interessos i les visions hegemònics a l'espai públic, contradient el principi normatiu de la democràcia deliberativa de la igualtat procedimental.

### 3. La barreres a la participació

És fàcil localitzar barreres que fan selectiva la participació. Així, els problemes econòmics indueixen a prioritzar l'obtenció d'ingressos i les desigualtats de gènere llasten la participació de les dones amb més càrregues familiars o de la llar (Parés et al, 2020). També sabem que el compromís cívic es correlaciona amb la família de naixement (Letki 2008, Bevelander i Pendakur, 2007) i que les barreres territorials són presents en els processos supramunicipals presencials. Pascual (2021) identifica sis col·lectius amb especials dificultats a Catalunya, encara que en trobaríem més:

- La diversitat funcional<sup>3</sup> genera barreres físiques, comunicatives i cognitives.
- La forta identificació entre institucions públiques i la cultura i la llengua normativa nacional frena les persones d'origen estranger<sup>4</sup>. Cal sumar la por de contactar amb les institucions públiques dels col·lectius en situació irregular.
- Les persones en institucions penitenciàries no tenen llibertat per accedir a les sessions ni presencialment, ni telemàticament.
- Les persones sense llar, la mostra d'exclusió més extrema, estan totalment allunyades de la vida relacional principal de l'esfera pública.
- La infància i la joventut, cosa que contradiu el mandat de considerar-los subjectes de dret, no només objectes de protecció (Lázaro, 2014)<sup>5</sup>.
- Les barreres digitals, en un entorn on plataformes com el Decidim cada cop tenen més protagonisme, perjudiquen especialment les persones grans, que ja compten amb factors específics que frenen la seva participació, com la solitud no desitjada o la concentració de malalties.

### 4. Mecanismes de superació de les barreres

La interseccionalitat i la superdiversitat condueixen a un nombre tan gran de situacions d'inferioritat estructural que fan inviable elaborar un protocol omnicomprensiu per aconseguir una representació perfectament descriptiva.

El camí és que les unitats administratives de participació actuïn amb una mentalitat de capacitació i impacte social de la participació, substituint la mentalitat burocràtica centrada en les oportunitats de participar que predomina a les nostres institucions

---

<sup>3</sup> ONU (2006) Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. L'article 29 recull el dret a la participació en la vida pública i política dels individus amb capacitats diverses .

<https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tcccconvs.pdf>

<sup>4</sup> Pacheco (2016) analitza les dificultats de les persones d'origen estranger a la participació.

<sup>5</sup> Convenció sobre els drets de la infància de les Nacions Unides (1989).

(González, 2004; Torrens, 2020). Aquesta mentalitat permetria repensar el disseny de les actuacions participatives, preguntant-se creativament com superar o, almenys, com mitigar les barreres a la participació tenint en compte el context i els públics més preocupats per cada decisió.

Es poden aplicar moltes mesures per mitigar els diferencials a la propensió a assistir, com convocar les deliberacions in situ, on la gent desenvolupa la seva vida quotidiana, en comptes de traslladar-la a oficines governamentals, o donar suport a les responsabilitats familiars, com a l'Assemblea Ciutadana del Clima de Catalunya, que oferiria un servei de cura a menors de 0 a 6 anys. En aquesta línia, Álvarez (2022) defensa que la participació ciutadana hauria de recolzar les cures a persones dependents (infància, ancianitat, pacients...), per superar les barreres a la participació que pateixen els sectors socials que dediquen hores al benestar. No cal aprofundir massa per connectar aquesta barrera amb la perspectiva de gènere<sup>6</sup>.

Taula 2. Algunes solucions a barreres a la participació en els col·lectius estudiats per Pascual (2021)

| Grup                        | Mecanisme  |
|-----------------------------|--|
| Diversitat funcional        | Locals accessibles<br>Lectura fàcil<br>Llenguatge de signes<br>Documentació en <i>braille</i><br>Endolls per a ventilació mecànica |
| Origen estranger            | Comptar amb les entitats socials per a la provisió de participants<br>Interpretació simultània, si cal                             |
| Institucions penitenciàries | Sessions presencials al seu interior   |

<sup>6</sup> Estadísticament, les dones exerceixen més feina no remunerada que els homes. Les dones, postpandèmia de la covid-19, dediquen de mitjana 16 hores més a la setmana a cures o tasques de la llar que els homes (Farré i González, 2021).

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sense llar          | Suport de serveis socials i les entitats que hi estan en contacte   |
| Joventut i infància | Deliberacions a l'entorn escolar i d'educació en el lleure  |
| Gent gran           | Adequar la mida de la lletra<br>Deliberacions híbrides aprofitant el voluntariat a domicili per donar el suport necessari |

On s'hi ha dipositat més esperances per neutralitzar l'autoselecció i obtenir una representació descriptiva és el sorteig (Van Reybrouck, 2017), que és el mètode de selecció de participants que s'aplica a les Assemblees Ciutadanes. Si se segueix el trilema de Fishkin (2011), s'obté un grup manejable per desenvolupar deliberacions de qualitat mentre es garanteix la igualtat política donant la mateixa probabilitat matemàtica a tothom d'estar present i influir en les decisions. Se sacrifica la participació massiva, cosa que no és una pèrdua significativa perquè, al capdavall, la majoria de processos participatius no solen ser massius.

A diferència dels jurats judicials, la participació dels quals és obligatòria excepte casos justificats, en aquestes assemblees la participació és voluntària, cosa que complica esquivar l'autoselecció. A l'Assemblea Ciutadana del Clima de Catalunya hi va haver un esforç per aconseguir un grup de 100 persones representatiu del conjunt de la societat a través de dos sorteigs estratificats respecte a gènere, edat, nivell d'estudi, territori i origen<sup>7</sup> <sup>8</sup>. El primer sorteig va obtenir una mostra raonablement descriptiva, tot i excloure els residents sense drets de ciutadania, menors de 16 anys i càrrecs electes. Tot seguit, les persones escollides van tenir l'opció d'inscriure's

<sup>7</sup> No queda clar com es van gestionar les dades sensibles que, a priori, no són al cens. Queda pendent l'anàlisi detallada d'aquesta metodologia de selecció. Font:

<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/546784/marxa-proces-escollir-persones-que-constituiran-lassemblea-ciutadana-pel-clima-catalunya>

<sup>8</sup> Una altra experiència similar va ser el Fòrum jove de Barcelona, celebrada entre el 15 de maig del 2021 i l'1 de maig del 2023. Va ser una assemblea ciutadana formada per 99 joves entre 16 i 29 anys escollits per sorteig per reflexionar sobre les polítiques municipals juvenils i obtenir propostes pel Pla de Joventut de Barcelona 2022-2030. Com detalla Decidim-Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona va fer un doble sorteig per obtenir participants representatius. Es va fer una selecció prèvia amb criteris d'edat, sexe, origen, barri i es van enviar 20.000 invitacions a les persones seleccionades.

D'aquestes, se'n van respondre 1.600 i es va realitzar un segon sorteig amb els mateixos criteris que va acabar escollint el grup de 99 participants.



voluntàriament omplint un formulari a la plataforma Participa.gencat.cat (Decidim de la Generalitat de Catalunya). Tot i que en el segon i definitiu sorteig es va fer amb els mateixos criteris d'estratificació, en aquest pas va aparèixer inexorablement l'autoselecció.

En primer lloc, trobem la bretxa digital associada a emplenar un formulari burocràtic mitjançant una plataforma de participació. En segon lloc, podem suposar que les persones més compromeses i intensament preocupades pel canvi climàtic van tendir més a inscriure's, cosa que generaria biaixos perquè la distribució d'aquest concerniment també està condicionada per factors estructurals. Finalment, atesa la superdiversitat de les nostres societats, la metodologia d'estratificació necessitaria centenars de classificacions, creuant gèneres, edats, nivells d'estudis, territoris, orígens culturals... S'hauria d'assegurar un mínim d'una persona a cada classificació i, quan n'hi ha més de una, aplicar el sorteig dins de cada classificació. Si alguna classificació estigués buida, potser caldria recórrer a la cerca activa de participants per complementar el sorteig.

Un cop definit el grup deliberant, la preocupació per mantenir la representació descriptiva es va traduir en compensacions econòmiques que neutralitzaren conflictes de lleialtats entre obligacions dels participants. Al capdavall, si hi ha costos de participació, només se'n podran mitigar els efectes amb incentius materials que els compensin.

## **5. Els incentius econòmics**

Encara que part de la compensació per participar sigui psicològica, de veure que la pròpia visió contribueix a les polítiques públiques (Elster, 1997), una altra part ha de ser material perquè la inhibició es reparteix desigualment segons la posició a l'estructura social.

Els incentius venent de lluny. A la democràcia participativa de l'Antiga Atenes, la *misthós* o compensació permetia que els ciutadans més pobres compatibilitzen la participació amb el treball productiu. Era una quantitat inferior a la renda necessària per alliberar de la feina, però permetia abandonar les activitats econòmiques de menor valor afegit i dedicar temps a la vida comunitària. Era un incentiu, no una manera de vida (Benítez 2005).

A la democràcia representativa, trobem incentius a les meses electorals que, tot i fer la selecció per sorteig i d'assistència obligatòria, inclouen una compensació econòmica (70€ a Espanya el 2024). Les alternatives serien organitzar-les amb voluntariat, amb risc de no cobrir totes les meses electorals; com a prestació obligatòria sense compensació, amb risc d'incrementar la resistència de la població

en cas de no poder afrontar les seves obligacions o a través dels partits, amb risc de corrupció electoral massiva (Márquez, 2024; Moreno, 2019).

A l'àmbit deliberatiu, els jurats populars a l'àmbit judicial segueixen el mateix esquema de selecció per sorteig i prestació obligatòria amb compensacions, encara que són més intenses ja que a la retribució econòmica directa afegeixen el servei de menjars, l'allotjament i el cost del transport<sup>9</sup>.

Amb aquesta llarga tradició, semblaria lògic contemplar incentius econòmics a la participació ciutadana. No obstant, són objecte de controvèrsia. El principal argument contrari és normatiu, ja que considera que la participació hauria de consistir en contribucions lliures i voluntàries al bé comú, que transcendeixen el benefici particular (Pachi 2009:76), sense crèdit, ni salari. Però ja hem vist que aquest plantejament condueix a la desigualtat procedimental i a la inequitat substancial, violentant els principis de la democràcia deliberativa.

Des del punt de vista funcional, es tem que la ciutadania assisteixi a les deliberacions només pels incentius, fent que hi sigui present físicament però mentalment desconnectada. Tot i això, aquesta argumentació és contrafàctica, ja que faria inviable els *focus-group* dels departaments de màrqueting de les empreses privades, que retribueixen els seus participants i els fan parlar ja no de temàtiques de bé comú, sinó de productes i serveis estrictament privats .

La tercera raó és el cost elevat per a l'administració organitzadora, ja que suposa dedicar recursos d'uns pressupostos sempre limitats. Tot i que assumim per experiència que la participació ciutadana té un elevat retorn de la inversió, ja que dona fluïdesa a la presa de decisions i, des del punt de vista substantiu, genera més valor públic, caldria fer una avaluació cost-benefici. Tot i això, en polítiques com la sanitat o l'educació, per tal que sigui la participació, només representarà una fracció insignificant de la despesa en aquests programes<sup>10</sup>.

En sentit contrari, el principal argument a favor de la compensació és que mitiga els costos de la participació, disminuint els efectes de barreres com ara la pèrdua de salari o vendes en el temps de treball productiu o les obligacions personals en el temps de treball reproductiu. I és d'interès general per obtenir grups equilibrats, perquè la inclusió participativa genera millores epistèmiques i de justícia social. A

---

<sup>9</sup> A Catalunya el 2024 eren 77€ per dia de sessió més 35€ per assistir al procés de selecció.

<sup>10</sup> El pressupost consolidat de la Generalitat de Catalunya en salut per al 2022 era de 11.244,2 M€, cosa que fa insignificant el cost d'introduir incentius a la participació, especialment si esperem un increment del valor públic de la despesa d'aquest pressupost.

més, des del punt de vista de l'equilibri comunicatiu, la diversitat a l'interior dels grups deliberants en dificulta la polarització, i és un contrapès a l'actual context comunicatiu.

Un cop acceptada la seva necessitat, cal decidir si els incentius econòmics han de ser individuals o comunitaris (Ziamou, 2000). Hi ha casos d'incentius per assistir als consells estables de participació a les associacions amb vocalies, així com a subvencions genèriques a sindicats, associacions veïnals o ecologistes per reforçar la veu feble en la formulació de les polítiques públiques. Però el context individualista actual (Camps, 1993) afavoreix els incentius directes a les persones. A més, els processos participatius solen estar oberts al conjunt de la ciutadania, de manera que la intermediació de les entitats socials sol limitar-se a difondre'ls o bé a reclutar de manera autònoma alguns participants.

Compensar amb diners genera el repte de calcular la quantitat a pagar, que no pot ser homogènia perquè no es donen les mateixes condicions a municipis amb pocs habitants i gran desenvolupament comunitari que a grans ciutats on predomina l'aïllament social (Langness et al, 2023). Des d'una aproximació utilitarista, podríem assimilar l'assistència com a equivalent a treball, ja que determinats perfils només hi participaran si deixen de banda el treball retribuït o bé el treball reproductiu, els costos d'oportunitat dels quals es podrien quantificar dineràriament.

Calcular els costos d'oportunitat té dificultats, com el problema de la dispersió estadística salarial. Ara bé, el primer criteri a tenir en compte és que no es tracta de compensar tots els costos d'oportunitat, sinó de superar les barreres dels col·lectius menys propensos a participar, sent raonable utilitzar algun criteri objectiu, com un percentatge de la mitjana de els salaris per hora d'assistència. En tot cas, la quantitat ha de ser moderada ja que l'objectiu es limita a donar l'oportunitat a tots i totes a participar per obtenir grups socialment equilibrats i evitar l'efecte invers: l'aparició de participants professionals (Arbter i Handler, 2007).

També cal contemplar els costos indirectes del trasllat i la manutenció. Si la ciutadania s'ha de desplaçar a una altra localitat, la institució organitzadora podria assumir aquests costos pagant el quilometratge o el transport públic. Si el nombre de participants és limitat, es poden organitzar el transport amb taxis o minibusos o, si és més nombrós, mitjançant cotxes compartits.

L'Assemblea Ciutadana del Clima de la Generalitat de Catalunya<sup>11</sup> és un cas pràctic de combinació de remuneració directa (65€ per sessió) amb l'assumpció de les despeses indirectes de transport, càtering, allotjament i serveis de cura. No podem

---

<sup>11</sup> Realitzada entre el 18 de novembre del 2023 i el 10 de febrer del 2024. Font: plataforma Participa.gencat: <https://participa.gencat.cat/processes/assembleaclima?locale=es>

valorar-ne l'impacte perquè encara no s'han publicat les dades de participació efectiva a l'Assemblea, ni, encara menys, les dades per estrat social de les que es van utilitzar als sorteigs.

Finalment, es podrien estudiar altres mecanismes, com el carnet de participant, amb descomptes als serveis públics, impostos i taxes. A més, dins dels incentius materials no estrictament econòmics, es podria preveure permisos dins de la jornada laboral. De la mateixa manera que la participació a les meses electorals implica un permís no recuperable de cinc hores el dia posterior, però amb la compensació corresponent a les empreses afectades.

## **6. Conclusions**

Les institucions representatives tenen dificultats per respondre problemes complexos. En aquest context, la participació ciutadana deliberativa permet abordar aquesta complexitat amb intel·ligència col·lectiva. La política de Govern obert promou l'ús de la participació ciutadana, però davant de la disjuntiva de donar més oportunitats de participació o bé incrementar la capacitat de la participació, caldria prioritzar la segona.

Això comporta la necessitat d'assegurar la presència de tots els grups socials afectats per les decisions públiques en la composició dels grups deliberants, cosa que obliga a superar o, com a mínim, mitigar les barreres a la participació. L'objectiu d'obtenir grups descriptius del conjunt de la societat exigeix repensar cada actuació participativa per adaptar-la a la idiosincràsia dels sectors socials especialment preocupats per la decisió pública. Aquesta ponència descriu algunes de les actuacions que es poden adoptar, entre les quals destaquen tres: el suport a les responsabilitats de cura de les persones participants, el sorteig i els incentius de caràcter econòmic.

Encara que siguin controvertits, són imprescindibles per aconseguir la igualtat procedimental associada als principis normatius de la democràcia deliberativa. Cal concebre'ls com una inversió, el retorn de la qual consisteix en millors decisions gràcies a l'increment de la intel·ligència col·lectiva al grup deliberant gràcies a l'augment del nombre de participants i de la seva diversitat. Aquest és l'interès general que justifica que les administracions públiques els apliquin a les seves experiències participatives.

Aquesta ponència es limita a explorar el problema dels incentius com a referència per a futures investigacions, amb la intenció de detectar aquelles qüestions que requereixen més atenció, entre les quals destaquen: quina estratègia d'incentius és més eficaç? Quina quantitat s'hauria de destinar a cada participant? Hauria de ser la mateixa per a cada participant, quan cadascú se situa en un punt de partida diferent?

És vàlid per a tots els processos participatius? Quin és el retorn de la inversió? o quina és la millora en la qualitat de les experiències participatives gràcies als incentius?

Finalment, cal tenir present que la representació descriptiva en els grups deliberants és condició imprescindible però insuficient per a una participació ciutadana inclusiva, ja que també caldria tenir en compte la representació substantiva o igualtat de llibertat expressiva dins dels fòrums deliberatius, incloent-hi aspectes com les barreres culturals a la participació, el sentit de la participació com a part de la satisfacció psicològica o els diversos graus d'ús de la paraula i de prestigi davant els altres participants.

## 8. Referencias

Abdullah, C M i McCormack. 2008. Facing Racism in a Diverse Nation. A Guide for Public Dialogue and Problem Solving. Everyday Democracy.

Álvarez, E. M (2022) La asamblea ciudadana para el clima. ¿Un modelo a seguir en las asambleas ciudadanas regionales y locales? *Revista Actualidad Jurídica Ambiental*, 122, 41-81 <https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-18-Alvarez-Asambleas-climaticas.pdf>

Arbter K, Handler M, Purker E, Tappeiner G y Trattnigg R (2007) *The Public Participation Manual. Shaping the future together*. Austrian Society for Environment and Technology.

Benítez, B (2005). *La ciudadanía de la democracia ateniense*. Foro Interno. Vol. 5. Universidad Complutense de Madrid. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2147332>

Bevelander, P y Pendakur R (2007) *Minorities, Social Capital and Voting*. Institute for the Study of Labor. Discussion Paper Series. 2928.

Blanco, I (2002, 8 al 11 de octubre). *Presupuestos participativos y democracia local : una comparación entre las experiencias brasileñas y españolas*. [Congreso] VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal <https://base.socioeco.org/docs/clad0043506.pdf>

Blanco, I i Gomà, R. (2003). Gobiernos Locales y Redes Participativas: retos e innovaciones. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (26), 73-100. <https://1library.co/document/9yn756pz-gobiernos-locales-participativas-innovaciones-ismael-blanco-ricard-goma.html>

Brugué, Q (2022) *Organizaciones que saben, organizaciones que aprenden*. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

- Cammaerts, B, i Carpentier, N (2004, 20 al 24 de maig). *The Unbearable Lightness of Full Participation in a Global Context: WSIS and Civil Society participation, Transnational Communities and ICTs: Participation and Citizenship*. [Conferencia] Universitat de Lapland, Rovaniemi, Finlandia <https://researchportal.vub.be/en/publications/the-unbearable-lightness-of-full-participation-in-a-global-contex-2>
- Camps, V, (1993), Paradojas del individualismo, Crítica
- Curato N y Doreen (2022). Rhetorical Criticism. Ercan, S, Asenbaum, H, Curato N, Mendonça R (Ed) *Research Methods in Deliberative Democracy*. (266-277), Oxford. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/60764>
- Decidim.Barcelona (s.d) *Foro Joven Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona* <https://www.decidim.barcelona/processes/forumjoveBCN?locale=es>
- Díez, S, Heras, E, Lidón I, Manchado E, Romero, C, (2021, 6 al 9 de julio) *Identificación de barreras de los procesos participativos en la ciudad de Zaragoza mediante la aplicación metodológica del diseño de Servicios* [Congreso]. 25 Congreso Internacional de Gestión de Proyectos y Ingeniería [http://dspace.aepro.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/2947/AT03-037\\_21.pdf?sequence=5&isAllowed=y](http://dspace.aepro.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/2947/AT03-037_21.pdf?sequence=5&isAllowed=y)
- Ebdon, C., y Franklin, A. L. (2006). Citizen participation in budgeting theory. *Public Administration Review*, 66(3), 437–447. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00600.x>
- Elster, J (1997). *The Market and the Forum: three varieties of political theory*, a Bohman, J i Regh (eds). *Deliberative Democracy*. MIT Press.
- Farré, L y González L (2021) .Trabajo remunerado y no remunerado: la pandemia acentúa el fenómeno de la doble jornada entre las mujeres. *Fundación la Caixa. El Observatorio Social*. <https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/trabajo-remunerado-y-no-remunerado-la-pandemia-acentua-el-fenomeno-de-la-doble-jornada-entre-las-mujeres>
- Fishkin, J. (2011). Deliberative democracy and constitutions. *Social philosophy and policy* (vol. 28, núm. 1, pàg. 242-260).
- Ganuzá, E y Menéndez, M (2019). ¿Te ha tocado? El sorteo llega a la política de Madrid. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, 25(1), pp. 95-109. <http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2020.25.1.6>
- González, A. (2004). *La participació telemàtica a les institucions públiques. Aplicació pràctica al Consell Insular de Menorca*. TFM - UOC.

Gutmann, A. i Thompson, D. (1996). *Democracy and Disagreement*. Boston: Harvard University Press.

Gutmann, A. i Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?* Princeton: Princeton

Habermas (1981). *Teoría de la Acción Comunicativa*.

Habermas, J (2002) *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Paidós básico.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, Mass: MIT Press. on University Press

Langness, M., Morgan, W., Cedano, S., y Falkenburger, E. (2023). *Equitable Compensation for Community Engagement Guidebook*. *Urban Institute*  
<https://www.urban.org/sites/default/files/2023-08/Equitable%20Compensation%20for%20Community%20Engagement%20Guidebook.pdf>

Lázaro, A (2014). La participació política de la infància a Catalunya: el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents. *Inf@ncia* (77).  
[https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions\\_de\\_bsf/04\\_familia\\_infancia\\_adolescencia/butlleti\\_infancia\\_articles\\_2014/links/profunditat-77.pdf](https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/04_familia_infancia_adolescencia/butlleti_infancia_articles_2014/links/profunditat-77.pdf)

Letki, N (2008) Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighborhoods. *Political Studies* 56 (1), 99-126  
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9248.2007.00692.x>

Márquez, L (2022) *L'impacte de les plataformes digitals en els processos participatius* [Trabajo de Final de Grado]. Universidad de Girona. <https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/21728>

Márquez, L. (2024). Incentius en la participació ciutadana. *Social.cat*.  
<https://www.social.cat/opinio/20328/incentius-participacio-ciutadana>

Martí, J. L. (2008). Algunes precisions sobre les noves tecnologies i la democràcia deliberativa y participativa. *IDP. Revista de internet, derecho y política*, (6), 3-12.  
<https://www.redalyc.org/pdf/788/78817209004.pdf>

Moreno J L (2019). *Retorno a Atenas*. La democràcia como principio antioligàrquico Madrid: Siglo XXI

ONU (2006) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  
<https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

Pacheco, J. (2016). *Els efectes democràtics de les deliberacions institucionals en la inclusió multicultural*. [Tesis]. Universidad de Barcelona. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/106713>

Pacheco, J. (2022). *La gestió pública intel·ligent a través del Govern obert digital*. Ponencia XVI Congreso AECPA. <https://aecpa.es/es-es/la-gestion-publica-inteligente-a-traves-del-gobierno-abierto-digital-/congress-papers/3987/>

Pachi, L (2009) La efectiva implementación de la participación ciudadana. *La Tendencia Revista de análisis político* (9) <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4635/1/RFLACSO-LT09-14-Panchi.pdf>

Parés L., Sola, M., Pacheco, J., Rodà, B i Peña , I. (2020). *Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius*. <https://governobert.gencat.cat/web/.content/30 ParticipacioCiudadana/04 Difusio i recerca/guies breus de participacio ciudadana/Guia-transversalitat-genere/Guia Transversalitat de Genere ACC.pdf>

Participa.Gencat.Cat (s.f) *Asamblea Ciudadana por el Clima*. Generalidad de Cataluña. <https://participa.gencat.cat/processes/assembleaclima?locale=es>

Pascual, J (2021) Les barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió." *Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya*. [https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2021-06/2021-06-29\\_t3s\\_dossier\\_catalunya\\_social\\_participacio\\_politica.pdf](https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2021-06/2021-06-29_t3s_dossier_catalunya_social_participacio_politica.pdf)

Tapella, E. (2021). Una evaluación sin evaluadores. Participación ciudadana en la Agenda 2030. *Revista Brasileira de Avaliação*, 10(2), 1-8 <https://app.periodikos.com.br/article/10.4322/rbaval202110013/pdf/rbaval-10-2-e101321.pdf>

Torrens, Xavier (2021). *La Nueva Gestión Pública como metodología de la Ciencia Política en el diseño de políticas públicas*. A: Sánchez de la Barquera, H. (2020) *Antologías para el estudio y la enseñanza de la Ciencia Política*. Volumen III. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Van Reybrouck, D (2017) *Contra las elecciones* Madrid: Taurus

Verba, S Schlozman K y Brady H E (1995) *Voice and Equality, Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

Ziamou, T. (2000) *Public Participation in Administrative Rulemaking: The Legal Tradition and Perspective in the American and European (English, German, Greek)*



*Legal Systems.* Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.